

Adriana Boersner-Herrera

El legado del 3 de enero: Repercusiones para las Américas

La madrugada del 3 de enero de 2026 no solo marcó el cambio de un liderazgo para Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sino que detonó una transformación en el sistema interamericano. Lo que se denominó oficialmente como Operación Resolución Absoluta (*Operation Absolute Resolve*) no fue simplemente un episodio aislado de cambio de liderazgo, sino la manifestación más contundente de un giro radical en la política exterior de Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald J. Trump. Este evento representa la aplicación práctica del “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, un marco estratégico que redefine la soberanía nacional bajo la lógica del interés nacional estadounidense, la seguridad transnacional y, de manera crítica, el control de los recursos estratégicos del Hemisferio Occidental.

El arresto de Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo ha fracturado de muchas maneras el tablero geopolítico regional, obligando a cada nación a recalcular su posición frente a un Washington que ha abandonado el lenguaje (y la práctica) de la diplomacia multilateral en favor de un realismo pragmático y de fuerza. Esta operación, ejecutada con una precisión que demostró superioridad táctica y estratégica, funcionó además como una demostración de capacidades que

reconfigura percepciones sobre la disuasión en la región, incluida la confianza que varios han depositado en proveedores extraheemisféricos de seguridad y defensa como China y Rusia. El mensaje fue inequívoco: la era de la “zona de paz” en América Latina, ya erosionada por la violencia criminal, entra ahora en tensión con una lógica abierta de coerción y esferas de influencia.

En este contexto, este texto se analiza las repercusiones sistémicas para las Américas, con particular énfasis en Latinoamérica. La caída de Maduro es el síntoma de una enfermedad más profunda en el orden internacional previo: el colapso de la autonomía latinoamericana frente a la renovada urgencia de Estados Unidos por asegurar su rol en Occidente en un mundo de competencia con China y otras potencias.

I. Antes del 3 de enero de 2026: Crónica de un quiebre anunciado

La intervención en Venezuela no surgió de un vacío estratégico ni de una decisión improvisada. Fue la consecuencia de negociaciones tras bastidores, comunicaciones constantes, pero sobre todo un entablado político construido por un grupo de individuos particulares dentro de la administración de Donald Trump, que incluyen de manera vital en este grupo al Secretario de Estado, Marco Rubio. El documento rector de esta nueva política exterior, la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025, ya delineaba un cambio de paradigma fundamental en la manera en que Estados Unidos concibe su rol en el mundo y, particularmente, en Occidente. Este documento sería reforzado con la posterior Estrategia de Defensa Nacional publicada en enero de 2026, aunándose a la idea de que se abandona explícitamente el enfoque de las administraciones de la postguerra fría, incluyendo la primera administración de Trump, que a menudo se perdían en listas de deseos y un globalismo que, según esta segunda administración

Trump, habría debilitado la base industrial, la cohesión social, la soberanía y la seguridad estadounidense.

La nueva doctrina se centra en una definición más estricta y pragmática del interés nacional, bajo el lema de “América Primero” (*America First*). Para el Hemisferio Occidental, esto se traduce en la formulación del Corolario Trump a la Doctrina Monroe, una actualización de aquel principio del siglo XIX que buscaba advertir a las potencias europeas contra cualquier intromisión en las Américas. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, expresa, en esencia, tres metas: preservar estabilidad regional para desincentivar migración masiva hacia Estados Unidos, asegurar cooperación contra organizaciones criminales transnacionales, y evitar que actores externos adquieran o controlen activos estratégicos. Leída retrospectivamente, esa lógica contenía el germen no sólo de la operación del 3 de enero, sino del repertorio de presión que puede venir después.

Faltará también ver en la práctica qué implicará aquello de asegurarse “que el Hemisferio Occidental permanezca razonablemente estable.” Esta estabilidad podría suponer más operaciones militares, mayor coerción económica, o simple cohabitación con liderazgos no democráticos, siempre que sean funcionales a la agenda de seguridad y recursos, teniendo en cuenta que la democracia no es el último fin de toda esta operación.

II. Repercusiones Inmediatas: Entre el shock y la controversia

La noticia de la operación del 3 de enero cayó como una bomba en el tablero geopolítico mundial, generando una fractura inmediata y profunda en Latinoamérica que reveló las diferencias de liderazgo y de gobiernos preexistentes en la región. Las reacciones se polarizaron casi instantáneamente, reflejando las

divisiones políticas que han caracterizado a América Latina en las últimas décadas.

Por un lado, un grupo de países liderado por Argentina, El Salvador y Paraguay celebró la acción como un golpe decisivo contra el “narcoterrorismo” y la tiranía. El presidente argentino Javier Milei la calificó como un paso decisivo hacia adelante que podría abrir el espacio para que la libertad avance en Venezuela. A ellos se sumaron Ecuador bajo Daniel Noboa, quien expresó su apoyo al combate contra los “narcos chavistas”, así como Guyana y Trinidad y Tobago, quienes vieron en la caída de Maduro una oportunidad para restaurar la democracia y la seguridad regional. El presidente guyanés Irfaan Ali incluso anunció el envío de tropas a la frontera con Venezuela como medida preventiva. De igual manera, la líder opositora venezolana y Premio Nobel, María Corina Machado, agradeció al gobierno de Estados Unidos por su “firmeza y determinación en la defensa de la ley”, prometiendo que Venezuela sería “el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

En el extremo opuesto, los gobiernos de izquierda de la región condenaron la intervención de manera unánime, invocando los principios de soberanía y no intervención consagrados en el derecho internacional y en la tradición diplomática latinoamericana. El presidente colombiano Gustavo Petro fue de los primeros en reaccionar, rechazando “cualquier acción militar unilateral que pudiera empeorar la situación o poner en riesgo a la población civil” y desplegando tropas en la frontera colombo-venezolana. El brasileño Lula da Silva adoptó un tono aún más firme, advirtiendo que los “bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable” que podría representar “el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde prevalece la ley del más fuerte sobre el multilateralismo”. México, a través de su presidenta Claudia Sheinbaum, emitió una

condena más matizada pero igualmente firme, recordando que “el continente pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman” y no a una doctrina o potencia. Finalmente, el gobierno autoritario de Cuba, el aliado más cercano de Maduro calificó la operación como un “acto de terrorismo de Estado” y reportó la muerte de 32 de sus militares en los bombardeos que acompañaron la extracción.

Un tercer grupo de países, incluyendo a Guatemala, Perú, Bolivia, República Dominicana y Canadá, adoptó una postura más cautelosa y ambigua. Si bien no condenaron explícitamente la acción estadounidense, hicieron un llamado al respeto del derecho internacional y se centraron en la necesidad de una transición democrática pacífica liderada por los propios venezolanos. Esta división se replicó en foros multilaterales como la OEA, cuyo Secretario General Albert Ramdin reconoció las “perspectivas divergentes en el hemisferio”, y el Consejo de Seguridad de la ONU, convocado de emergencia a petición de Colombia con el apoyo de China y Rusia. En esa sesión, los representantes chino y ruso condenaron la “agresión unilateral” de Estados Unidos, mientras que los aliados europeos de Washington, aunque incómodos con la unilateralidad de la acción, compartían la urgencia de combatir el crimen organizado transnacional y se limitaron a pedir “calma y moderación”.

Al mismo tiempo, la operación desató una intensa controversia dentro de Estados Unidos sobre los poderes de guerra del presidente y los límites constitucionales de la acción ejecutiva. La administración Trump argumentó que el presidente tiene la autoridad constitucional para usar la fuerza militar sin autorización del Congreso, siempre que no se espere que resulte en “enfrentamientos militares prolongados y sustanciales”. El Secretario Rubio defendió la legalidad de la acción ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado afirmando que “esto no fue una

invasión, no ocupamos un país... Fue una operación para ayudar a la aplicación de la ley”, sugiriendo implícitamente que operaciones más amplias sí requerirían el aval del Congreso. Los americanos siguen divididos en cuanto al rol que Estados Unidos debe jugar en el contexto venezolano y en cuanto a las supuestas etapas posteriores a la operación militar del 03 de enero.

III. Repercusiones futuras: un nuevo paradigma para las Américas

El legado más duradero de la operación del 3 de enero se medirá en los cambios estructurales que provoque en el sistema interamericano. Aunque es imposible predecir el futuro con certeza, la secuencia de narrativas y acciones de la administración Trump, así como el marco estratégico que el propio gobierno ha establecido en sus documentos oficiales, permiten delinear varios ejes de repercusiones a largo plazo: el precedente sobre la soberanía y el uso de la fuerza, la reconfiguración de alineamientos estratégicos y el nuevo enfoque en la seguridad transnacional.

1. Soberanía y uso de la fuerza

La intervención en Venezuela ha sentado un precedente peligroso que erosiona el principio de soberanía y la prohibición del uso de la fuerza hasta ahora distinguidos como pilares del derecho internacional y de la convivencia pacífica en una región históricamente sensible al intervencionismo directo e indirecto de grandes potencias y otros actores internacionales. Al justificar la operación bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo y aplicar la justicia estadounidense a un líder extranjero acusado de narcotráfico, Washington ha establecido una justificación elástica que podría aplicarse a múltiples contextos. Como advirtió el presidente chileno saliente Gabriel Boric en una conferencia de prensa el mismo 3 de enero, “hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y

una intención declarada de controlar sus recursos, mañana, puede ser en cualquier otro lugar, con alguna otra excusa.” Lula da Silva de Brasil declararía algo similar haciendo un llamado al peligroso precedente para todos los países del Sur Global.

Esta nueva situación incentiva respuestas espejo y una mayor desconfianza hacia Estados Unidos. Los países que se sientan vulnerables podrían buscar fortalecer sus capacidades, acelerar programas de armamento no convencional, o estrechar lazos con potencias extra-hemisféricas para obtener un contrapeso diplomático y militar, algo que ya venían haciendo muchos, incluyendo Venezuela, para contrarrestar las amenazas de Estados Unidos. La idea de América Latina y el Caribe como una “zona de paz,” promovida en declaraciones conjuntas por varios gobiernos de la región, queda seriamente comprometida. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó la acción como “un precedente peligroso,” una advertencia que si bien no es sorprendente resuena más allá del hemisferio. Observadores en Taiwán, por ejemplo, han expresado temor de que la operación pueda envalentonar a China a actuar de manera similar. Lo mismo puede ocurrir en otras regiones y contextos.

2. Alineamientos estratégicos: la lógica de la esfera de influencia

La operación en Venezuela parece ser una pieza central de una estrategia más amplia para reconfigurar los alineamientos en el hemisferio bajo una lógica explícita de esfera de influencia. El documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 imagina un orden internacional más transaccional donde las alianzas están condicionadas por el alineamiento estratégico y el reparto de cargas no por valores compartidos o instituciones multilaterales. Para Latinoamérica, esto implica un retorno a una dinámica que muchos creían superada. Los países de la región pueden obtener

beneficios por su cercanía geográfica, como inversión preferencial, acceso al mercado estadounidense y cooperación en seguridad, pero el costo podrá ser aceptar condiciones que marginalicen sus relaciones con actores extra-hemisféricos, principalmente China, cuya presencia comercial y financiera en la región ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. Los primeros pasos ya se dieron con la reciente reunión ministerial en Washington D.C. sobre Minerales Críticos, en la cual hubo la participación de nueve delegaciones de las Américas. Más allá del discurso de cooperación, el encuentro apunta a consolidar un esquema de suministro, estándares e inversión en minerales estratégicos con Estados Unidos como nodo central y con el objetivo, aunque no expreso, de reducir la dependencia regional de China. La implicación para América Latina es que los minerales críticos dejan de ser un tema comercial y pasan a ser una variable de alineamiento político.

En líneas generales, la reacción de China y Rusia a la operación del 3 de enero fue de condena retórica, pero también de notable cautela operativa, algo que no es de sorprender debido a que ambos países no tienen la capacidad y presencia efectiva en el Hemisferio Occidental y tienen otras prioridades fuera de el hemisferio occidental. La demostración de fuerza de Estados Unidos y, particularmente, el fracaso de los sistemas de defensa área rusos y chinos desplegados en Venezuela para detectar o repeler la operación, obligan a estas potencias a recalcular el costo-beneficio de desafiar a Washington en Occidente. Es probable que, en el corto plazo, moderen sus acciones más provocadoras en la región, aunque mantendrán y defenderán sus lazos e interés económicos y diplomáticos más importantes en la región.

3. *Seguridad transnacional: La guerra contra los cárteles*

Finalmente, la operación en Venezuela ha elevado la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico al nivel de una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos, equiparable en su retórica y en sus implicaciones operativas a la lucha contra el terrorismo que definió la política exterior estadounidense tras el 11 de septiembre de 2001. La NDS de 2006 es clara al señalar el tráfico de drogas como una “amenaza directa a la seguridad” del territorio nacional y afirma que, si bien se buscará la cooperación con los socios regionales, Estados Unidos está “preparado para actuar de manera decisiva y unilateral si es necesario”. La operación en Venezuela fue la primera demostración de esta disposición.

Los comentarios del presidente Trump sobre la necesidad de “hacer algo con respecto a México”, donde los cárteles supuestamente “dirigen el país”, y su promesa de “empezar a golpear tierra con respecto a los cárteles”, indican que la presión se intensificará sobre otros países de la región. Aunque una intervención militar unilateral en México es considerablemente menos probable debido a los enormes costos políticos, económicos y de seguridad que implicaría, Washington utilizará toda su capacidad de coerción diplomática y económica para exigir resultados tangibles en la lucha contra los cárteles.

El mensaje de Estados Unidos es claro: o se integran al bloque preferencial con Estados Unidos, o enfrentarán barreras arancelarias que podrían hundir sus economías. La salida de Maduro del poder no trajo una transición, sino un estallido de estado de acefalía controlada. Aunque Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de facto, su margen de maniobra es restringida. Ya varias acciones hablan por sí solas: ley de amnistía, ley de hidrocarburos, cambios en el gabinete, entre otros. De igual manera, en América

Latina, Gustavo Petro ha mantenido una relación de choque y hostilidad con Trump, posicionando su liderazgo en extrema vulnerabilidad ante las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Claudia Sheinbaum en México ha recibido una escalada de retórica desde Estados Unidos que terminó en la entrega a Estados Unidos de al menos 37 presos con cargos de narcotráfico. La Cuba de Díaz Canel dice estar dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos mientras la presión en el Caribe se mantiene y Estados Unidos amenaza a países que suministren petróleo a la isla. Estas acciones muestran que, para varios gobiernos no alineados con Washington, la estabilidad política se está volviendo condicional: depende de ofrecer señales anticipadas de cooperación con la agenda estadounidense, pese a los discursos de soberanía. La entrega de detenidos, la aceleración de extradiciones o las visitas a la Casa Blanca operan como gestos de apaciguamiento destinados a reducir presión diplomática, económica o de seguridad y a evitar una escalada más directa. Al mismo tiempo, los alineamientos abiertamente proclives a Washington, como la Argentina de Javier Milei, evidencian que este reordenamiento también avanza por afinidades ideológicas y electorales, no solo por cálculo geopolítico.

La operación del 3 de enero de 2026 ha inaugurado una nueva era en las relaciones interamericanas, una cuyo contorno apenas comenzamos a discernir. Más que un evento aislado o una respuesta *ad hoc* a la crisis venezolana, fue la culminación de un cambio doctrinal profundo en Washington que revive la Doctrina Monroe bajo un nuevo corolario pragmático y que parece venir con toda fuerza. Las repercusiones inmediatas han sido una profunda fractura diplomática en la región, que ha expuesto más allá de los liderazgos propios en Latinoamérica de las divisiones ideológicas latentes, y un intenso debate sobre los límites del poder presidencial dentro de Estados Unidos. A largo plazo, el legado de esta operación será una redefinición de los conceptos de sobe-

ranía y no intervención, una reconfiguración de los alineamientos estratégicos bajo la lógica de una esfera de influencia explícita y una intensificación de la lucha contra el crimen transnacional con herramientas que antes se reservaban para el combate al terrorismo. Las se enfrentan en estos próximos tres años a una nueva realidad, donde las reglas del juego que rigieron durante décadas han cambiado de forma que bien podría ser irreversible. Quedará por ver si este viraje se consolidará como doctrina duradera del poder estadounidense o si será moderado, corregido o revertido por las prioridades de futuras administraciones y por la capacidad de los países de la región de resistir o negociar nuevos términos.